

Estado Social de Derecho colombiano y el derecho a la educación en población desplazada*

NELSON JAÍR CUCHUMBÉ HOLGUÍN**
JULIO CÉSAR VARGAS BEJARANO***

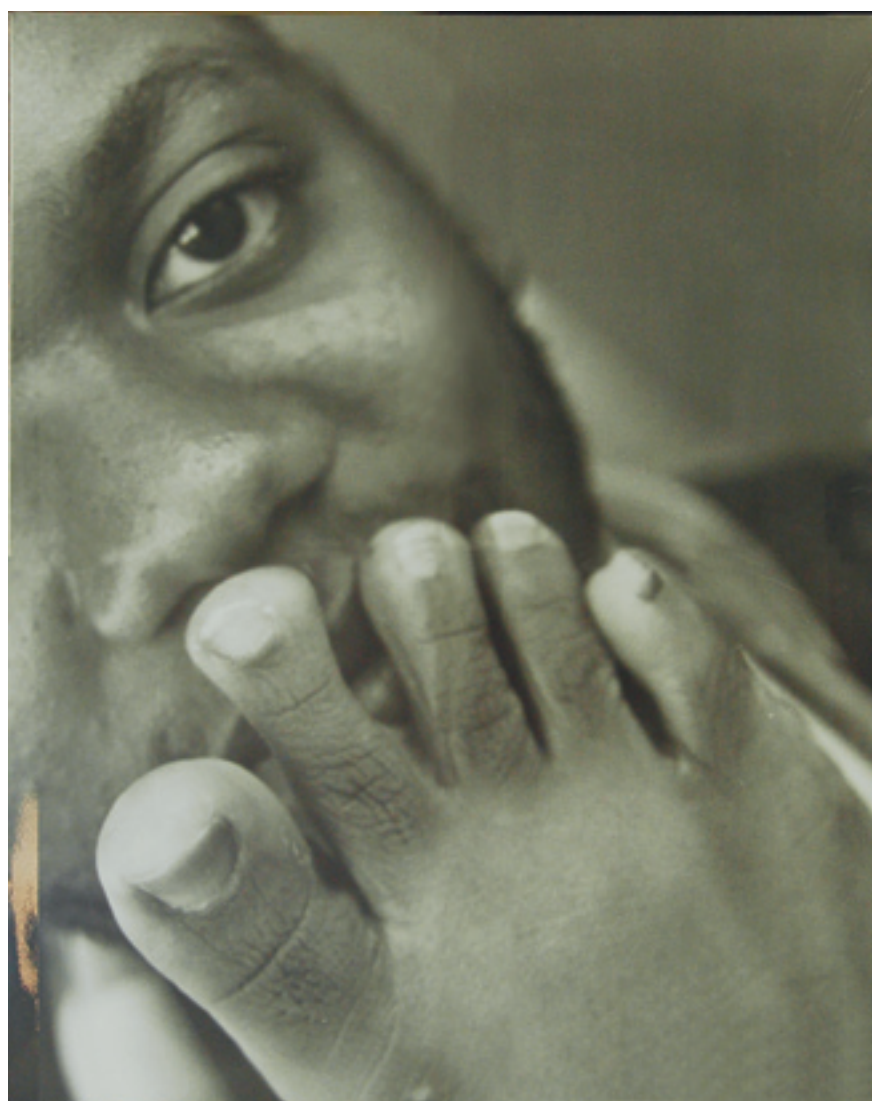


Foto: Estud. Nury Zamora Garcés, Comunicación Publicitaria. UAO

Resumen

En este trabajo se presenta la función del Estado colombiano con respecto a la preservación del derecho a la educación en población desplazada, a partir de la concepción de Estado social de derecho expuesta en la Constitución Política de 1991 y la teoría liberal. Después se reconstruyen los valores y principios del Estado Social de Derecho, las características del Estado Social de Derecho, y la relación entre Estado Social de Derecho y preservación del derecho a la educación en población desplazada. Se concluye que las leyes aprobadas no están acompañadas de una voluntad política para reconocer y asumir la magnitud del problema a); el hecho social de concebir al desplazado como amenaza no permite comprender que éste ha sido ubicado en un escenario social que presupone capacidades, aptitudes y saberes totalmente diferentes a los de su identidad b). La sociedad en su conjunto tiende a reducir la

* Este artículo sinteriza uno de los resultados del Proyecto de investigación sobre los “Modos de argumentación de la Corte Constitucional colombiana cuando está en riesgo el derecho a la educación en población desplazada por el conflicto armado”. Proyecto desarrollado por el grupo de investigación Sociedad, Tecnología y Comunicación, de la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

** Máster en Filosofía. Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Departamento de Humanidades.

*** Doctor en Filosofía, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Departamento de Humanidades.

Fecha de recepción: Enero 23 de 2006. Fecha de aceptación: Marzo 14 de 2006

condición de humanidad en el desplazado y c) la relación entre ciudadano desplazado y la construcción de proyecto de país está asumiéndose por fuera de la cooperación social.

Palabras clave: Estado social de derecho, desplazados, derecho a la educación.

Abstract

This work shows the function of the Colombian State in the context of the preservation of the right to education of displaced persons, based on the concept of this Social Right as an Obligation of the State as is stated in the Political Constitution and liberal theory. It then reconstructs the values and principles of the Social Right as an Obligation of the State, its characteristics, and its relationship with the preservation of the right to education among the population of displaced persons. The conclusion is drawn that the existing laws are not accompanied by a political desire to recognize and assume the magnitude of the problem, and that a displaced person is seen as a threat prevents the acceptance of the fact that they have been cast in a setting which assumes certain abilities, aptitudes and knowledge which are totally different from their identity. This negatively affects the human condition of the displaced person, and the relationship between the displaced citizen and the plan for rebuilding the country are assumed to be outside the concept of social cooperation.

Key words: Social Right as an Obligation of the State, displaced persons, right to education



Foto: Esud. María del Pilar Aristizábal. Comunicación Social. UAO

Introducción

Colombia es desde 1991 formalmente un Estado Social de Derecho, donde la Corte Constitucional guarda la integridad y supremacía de la Constitución Política y revisa, de acuerdo con la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.

En las decisiones sobre los derechos los jueces fallan atendiendo normas constitucionales que representan principios y valores propios del Estado colombiano. Para ello, los jueces hacen uso de procedimientos, reglas y formas de justificación que van constituyendo líneas jurisprudenciales que marcan soluciones a los diversos casos en donde están en riesgo los derechos, como es el caso del derecho a la educación en población desplazada.

La acción de los jueces al emitir fallos a través de sentencias es uno de los modos como el Estado ejecuta su función como garante de los derechos. En este marco surge la cuestión que abordamos en este trabajo: ¿Cuál es la función del Estado con respecto a la preservación del

derecho a la educación en población desplazada por el conflicto armado colombiano?

Esta pregunta la desarrollamos a partir de cuatro pasos: en primer lugar, presentaremos la función que cumplen los valores y principios con respecto a la realización del Estado Social de Derecho. En segundo lugar, identificaremos a partir de estos presupuestos los rasgos éticos-políticos que caracterizan a este tipo de Estado. Esto nos permitirá, en tercer lugar, visualizar el modo como el Estado debe orientar su acción para la preservación del derecho a la educación en población desplazada. Por último, el desarrollo de estos tres aspectos nos permitirá reflexionar sobre algunas consecuencias socio-políticas que tiene la falta de garantías por parte del Estado colombiano respecto del derecho a la educación en los desplazados.

Desarrollo

Valores y principios del Estado Social de Derecho

El Estado colombiano realiza su acción según valores y principios que constituyen el marco axiológico e interpretativo que orienta el modo como los jueces deben fallar para garantizar y preservar a todos los ciudadanos, un orden social justo.

Los valores configuran cargas normativas que son utilizados por los jueces para fundamentar sus decisiones jurídicas. Éstas son falladas cuando está en riesgo un derecho acordado como condición para la realización individual o colectiva. Entre estos valores encontramos los siguientes: “fortalecer la unidad de la nación y asegurar la vida a sus integrantes, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el

conocimiento, la libertad y la paz, la honra, la dignidad y la integridad de la familia”.¹

Los principios son distinguidos como pautas de interpretación de hechos jurídicos tipificados o no tipificados. Estos principios contienen la fuerza o carga valorativa otorgada por la sociedad y su tradición socio-jurídica. Algunos de ellos son: la igualdad, la soberanía nacional, la no discriminación, la dignidad humana, la efectividad de los derechos y garantías, la solidaridad social, la equidad, entre otros.

Estos valores y principios son considerados como presupuestos de orden axiológico y hermenéutico que cumplen con una doble función. Por un lado, orientan las decisiones y fallos emitidos por los jueces. Y, por otro lado, constituyen pautas de interpretación que permiten establecer una solución a un caso en donde aparezca en riesgo un derecho constitucional. El modo como son realizados estos presupuestos aparece cuando son usados por los jueces para asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido axiológico, social, político, económico consignado como condición material en la Constitución Política. Es decir, el punto que permite distinguir la realización de dichos presupuestos aparece cuando los jueces les dan vida real y efectiva a los derechos constitucionales que asisten a todos los ciudadanos. Se trata, entonces, de entender qué valores y principios son consustanciales en la concepción de Estado Social de Derecho colombiano, y que su realización supone convertir los derechos constitucionales en derechos reales.

En el Estado colombiano, tanto valores como principios irradian toda la organización política-jurí-

¹ Niebles Osorio, Edgardo. *Constitución Política de Colombia*, Librería Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá, 2004, Preámbulo, XXI.

dica. Por tanto, deben ser protegidos dado que permiten visualizar acciones jurídicas dirigidas a garantizar en los ciudadanos un conjunto de derechos y libertades,² un orden civil, y unas condiciones de vida dignas. Así, tanto permanencia y obligatoriedad de derechos constitucionales como acciones jurídicas configuran, en parte, condiciones para que el Estado colombiano cuente con “el poder jurídico de movilizar a los órganos públicos en el sentido de concretar, en cada momento histórico, un modo de vida público y comunitario que ofrezca a las personas las condiciones materiales adecuadas para gozar de una igual libertad”.³

De acuerdo con lo anterior, el Estado colombiano no puede restringirse a la simple aplicación de normas o acciones jurídicas encaminadas a garantizar derechos o libertades políticas, sino que también supone acciones, procedimientos, reglas, trámites y discusiones encaminados a formular y aprobar políticas gubernamentales que permitan la realización de los derechos con contenido social y económico. Esta concepción de Estado comprende la voluntad política del legislador y un sistema jurídico puesto en marcha por los operadores de justicia a partir de procedimientos encaminados a dar cumplimiento a los compro-



Foto: Luis Hernández. La Palabra

misos y fines sociales proyectados en la Constitución Política.

En resumen, tanto legislador como sistema logran su realización cuando la acción del juez es concebida como un esfuerzo de interpretación y de argumentación orientado a concretar el conjunto de condiciones económicas, culturales, políticas y civiles que garantizan un orden social justo y equitativo.⁴ Es precisamente esta actividad jurídica la que representa uno de los modos como el Estado colombiano debe adelantar la consolidación de la socialdemocracia⁵ visualizada en la Constitución actual.

Características del Estado Social de Derecho

El Estado Social de Derecho es resultado de un proceso histórico que se inicia con los Estados-nación

surgidos a partir de las reivindicaciones propuestas en la Revolución Francesa. El afianzamiento y consolidación del Estado-nación con un esquema democrático permitió el desarrollo de este tipo de Estado fundado en rasgos éticos-políticos. El conjunto de estos rasgos los presentamos teniendo como punto de referencia tanto los planteamientos expuestos desde el liberalismo político, como el articulado de la Constitución Política de Colombia.

El primer rasgo, supone actores sociales que conciben los conflictos como desafíos políticos. Estos deben ser resueltos haciendo uso de la acción de intervención de los ciudadanos que se conciben como libres e iguales⁶ y del conjunto de instituciones igualitarias del derecho construidas y adoptadas de modo consciente, voluntario y autó-

2 La Constitución Política de Colombia (1991) reconoce en el título II, capítulos I y II tanto los derechos fundamentales como los derechos sociales, económicos y culturales. En este sentido, expresa en el artículo 42 que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia y en el artículo 44 que son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separado de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Véase, Niebles Osorio, Edgardo. *Constitución Política de Colombia*. Ediciones del Profesional, Bogotá, 2004, pp. 123 y 130.

3 *Ibid.*, p. 6

4 En términos de John Rawls el concepto de lo equitativo exige la igualdad equitativa de oportunidades ante los cargos públicos y posiciones sociales que deben estar abiertos a todos los ciudadanos.

5 La socialdemocracia implica una concepción de una sociedad que actúa políticamente sobre sí misma mediante la voluntad y la conciencia de unos ciudadanos democráticamente unidos. Véase, J. Habermas, *La constelación posnacional*, Paidós, Barcelona, 2000, p. 83

nomo. En efecto, se debe reconocer que en las sociedades fundadas en el Estado Social de Derecho los ciudadanos se imponen a sí mismos marcos jurídicos que representan un modo de organización social-democrático que les garantice un orden justo.⁷

Un segundo rasgo está referido a la tendencia institucional de no tolerar que “surjan prejuicios y discriminaciones sistemáticas que resten posibilidades a los miembros de grupos poco privilegiados y se debe hacer un uso real de los derechos formales equitativamente repartidos”.⁸ Es a partir de este rasgo que cobra sentido la tarea del Estado Social de Derecho; pues debe contribuir al aseguramiento y permanencia de “condiciones de vida sociales, tecnológicas y ecológicas que permitan a todos disfrutar de las mismas oportunidades tal y como, en principio, hacen posible los derechos civiles iguales para todos”.⁹

En términos de la actual Constitución Política colombiana, el anterior rasgo constituye un deber social del Estado que sólo se realiza cuando las leyes y los actos administrativos están en función de todos los ciudadanos y de los diversos modos de vida que configuran el panorama multicultural nacional. En efecto, la eficacia de la ley y de los actos administrativos depende del aseguramiento de condiciones de inclusión social que presuponen al Estado colombiano.

Un tercer rasgo comprende una acción permanente y legítima, encaminada a proteger los derechos sociales, económicos y culturales. El modo de protección de estos derechos exige del Estado una política de cobertura y calidad que garantice a todos los ciudadanos la posibilidad de desarrollar sus diferentes aptitudes y capacidades para interactuar socialmente en condiciones de igualdad¹⁰ digna. El cumplimiento de los derechos sociales de los ciudadanos demanda gobiernos que administren los recursos de acuerdo con necesidades y contingencias relacionadas con la seguridad social y principios universales que deben concebirse como principios institucionales. Una de estas necesidades es la educación, la cual debe ser garantizada a todos los ciudadanos sin ningún tipo de estigma o situación social, pues ella constituye una de las condiciones para participar en la vida pública.

Un cuarto rasgo presupone un Estado defendiendo los derechos constitucionales, es decir, los derechos de primera y segunda generación promulgados en la Constitución Política. En efecto, se trata de comprender como exigencia ética de justicia¹¹ la satisfacción legítima de los derechos por parte del Estado.

En concreto, identificados los rasgos éticos-políticos que caracterizan al Estado Social de Derecho, podemos señalar que los derechos

6 El sentido que le asignamos al concepto de ciudadanos libres e iguales está relacionado con la valoración hecha por Rawls: Digamos que se conciben como iguales en el sentido de que todos se entienden poseedores, en grado mínimo esencial, de las facultades morales necesarias para participar en la cooperación social durante toda una vida y para formar parte de la sociedad como ciudadanos iguales. Y, como libres en el sentido en que se entienden como fuentes autoautentificadoras de exigencias válidas. Es decir, se ven a sí mismos con derecho a presentar exigencias a sus instituciones con ánimo de promover sus concepciones del bien (siempre que esas concepciones caigan dentro del espectro permitido por la concepción política de la justicia). Véase, John Rawls, *La justicia como equidad*, Paidós, Barcelona, 2002, pp. 44 y 48

7 De acuerdo con nuestro contexto constitucional cabe resaltar que El orden justo según lo ha promulgado la Corte constitucional lo constituye la observancia de la Constitución, por las leyes acordes con la Norma superior, por los actos administrativos que reglamentan la aplicación de la Constitución y la ley y por las providencias que definen cuál es el derecho aplicable a una determinada situación particular. *Ibíd.*, p. 2

8 *Ibíd.*, p. 89

9 *Ibíd.*, p. 89

10 Al respecto podemos decir que la igualdad como principio revela que se trata de que la igualdad sustancial alude no sólo al compromiso del Estado, sino de los particulares de remover los obstáculos que en el plano humano, económico y social configuran efectivas desigualdades de hecho que se oponen al disfrute efectivo del derecho. La igualdad sustancial revela un carácter remedial, compensador, emancipatorio, corrector y defensivo de personas y de grupo ubicados en condiciones de inferioridad, mediante el impulso de acciones positivas de los poderes públicos y de la comunidad en general. Véase, Constitución Política de Colombia, 2004, p. 49

tienen vinculación con la dignidad humana, por tanto, deben concebirse como exigencias necesarias que requieren de la acción interventora del Estado. Intervención que debe estar orientada por políticas públicas con una adecuada instrumentación organizativa y presupuestal. Así mismo, es posible expresar que el conjunto de rasgos señalados configura una concepción de justicia centrada en el principio de igualdad de oportunidades en todos los ciudadanos para el acceso oportuno a los derechos de segunda generación, dentro de los que sobresale el derecho a la educación.



Foto: Luis Hernández. La Palabra

Estado Social de Derecho y preservación del derecho a la educación en población desplazada

Hemos observado que el Estado puede ser visto de manera formal como defensor de los derechos. El objeto del Estado es garantizar a todos los colombianos sus derechos, en especial cuando hay población que presente una situación de riesgo o amenaza en sus derechos. En este sentido entender cómo el Estado colombiano responde a esta demanda constitucional implica presentar argumentos relacionados con: a) Estado Social de Derecho y protección del derecho a la educación, b) Factores domésticos que influyen para la existencia de población desplazada en Colombia y c) Sistemas de atención del Estado colombiano para garantizar el derecho a la educación en población desplazada.

a) La actual Constitución propugna la defensa de los derechos

inalienables del ciudadano colombiano. A la luz de este criterio normativo es posible señalar que el desarrollo del articulado de la Constitución debe realizarse desde un ordenamiento jurídico constituido a partir de los derechos del ciudadano. Dentro de éstos encontramos, entre otros, el derecho al conocimiento, el derecho a la cultura y el derecho a la educación; ellos exigen un estricto cumplimiento por parte del Estado a través de su ordenamiento jurídico. Así, la protección y aplicación de todos los derechos exige del gobierno el diseño y desarrollo de un conjunto de planes, procedimientos y leyes fundados en la Constitución colombiana.

En lo concerniente a las leyes deben estar elaboradas desde los principios y valores que configuran el marco interpretativo y axiológico que sirve como trasfondo de la Constitución colombiana, y suponen

un estricto cumplimiento para particulares y autoridades públicas, mientras que los planes suponen acciones estratégicas del gobierno nacional encaminadas a realizar las políticas de atención integral a la población que presente una situación de amenaza a sus derechos.

Esta condición legal de protección y aplicación de los derechos demanda, para el caso del derecho a la educación en población desplazada, un peculiar modo de normatividad del Estado colombiano centrado en la acción de tutela, la ley general de educación, y el diseño y adopción del plan nacional para la atención integral a la población desplazada.

La primera comprende uno de los procedimientos legales adoptados para garantizar el cumplimiento de los derechos en nuestro contexto social. Este procedimiento supone un ordenamiento jurídico que ope-

11 Es importante tener en cuenta que, en el Estado Social de Derecho, los derechos fundamentales no tienen valor, si no existe una Ética del Estado, que incluya dentro de ellos no sólo las libertades pregonadas en la Declaración de Derechos del Hombre, sino también, las libertades económicas, sociales y culturales.. Véase, Niebles Osorio, Edgardo, Constitución Política de Colombia, Ediciones del Profesional, Bogotá, 2004, p. 2.

re teniendo en cuenta que: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”.¹² Por tanto, la acción de tutela podemos concebirla como la facultad que posee todo ciudadano para recurrir ante la autoridad competente (juez) para solicitar legalmente el amparo de su derecho a la educación.

El derecho a la educación es uno de los derechos que debe ser amparado por el Estado colombiano, por tanto, es un derecho inviolable dado que no ampararlo implicaría crear condiciones para el deterioro de la dignidad del ciudadano, pues, este derecho constituye un aspecto fundamental de la humanidad del ciudadano como sujeto con derechos.

La segunda situación normativa diseñada para la protección y aplicación de los derechos es la ley,¹³ cuya función es reglamentar las condiciones para garantizar la preservación del derecho a la educación. Para ello el Estado colombiano promulgó la Ley General de la Educación. El objeto de la ley es la educación como “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.¹⁴

Así, la Ley General de Educación regula en sentido formal y material la función social de la educación en aspectos relacionados con la construcción de la individualidad, las relaciones interpersonales y lo cultural.

La tercera situación está relacionada con una de las acciones diseñada y adoptada por el gobierno nacional para intervenir y garantizar a la población desplazada sus derechos. Aquí hacemos referencia al “Plan de atención integral para la población desplazada por la violencia”.¹⁵ Éste representa el conjunto de procedimientos y de estrategias que deben adoptar las entidades públicas para la intervención estatal en la atención integral a la población desplazada. Así mismo, contiene los principios que orientan la ejecución de los recursos asignados en el presupuesto nacional y las fases de intervención y líneas estratégicas.

No obstante, cabe señalar que el Estado colombiano recientemente ha diseñado una política de atención pública al desplazado con algunas orientaciones claras. Sin embargo, es de tener presente que ellas apenas están en una primera fase de diseño y ejecución. Lo anterior se debe a que como lo afirma el informe del Codhes: “la política del presidente Uribe es mucho más conservadora que la del anterior gobierno, pues su formulación fundamental es el aplazamiento del problema hasta que se logren condiciones de terminación del conflicto y en términos de inversión, el programa bandera es el retorno de 30.0000 familias.”¹⁶

12 *Ibíd.*, p. 213

13 En sentencia C-893/99 la Corte Constitucional Colombiana establece una distinción entre la ley en sentido formal y la ley en sentido material. Esta distinción permite identificar que en la primera definición prima un criterio orgánico, pues corresponde a una regulación expedida por el legislador, mientras que la ley en sentido material es una norma jurídica que regula de manera general una multiplicidad de casos, haya o no sido dictada por el órgano legislativo. Por ende, una regulación es la ley en sentido formal y material, cuando emana del órgano legislativo y tiene un contenido general; en cambio es sólo ley en sentido formal si ha sido dictada por el poder legislativo, pero su contenido se refiere a un solo caso concreto; y es ley sólo en sentido material, cuando tiene un contenido general, esto es, se refiere a una multiplicidad de casos, pero no ha sido expedida por un órgano legislativo. Véase, Nibbles Osorio, Edgardo, *Constitución Política de Colombia*, Ediciones del Profesional, Bogotá, 2004, p. 24.

14 Presidencia de la República de Colombia. Ministerio de Educación Nacional, 1994: <http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situación/Legislación/Educación/EL11594.HTM>

15 República de Colombia. Ministerio del Interior y de Justicia. Decreto 250 de febrero de 2005

16 Cfr. CODHES, Boletín de Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento. Nr. 44, Bogotá, 28 de Abril del 2003, p. 12.

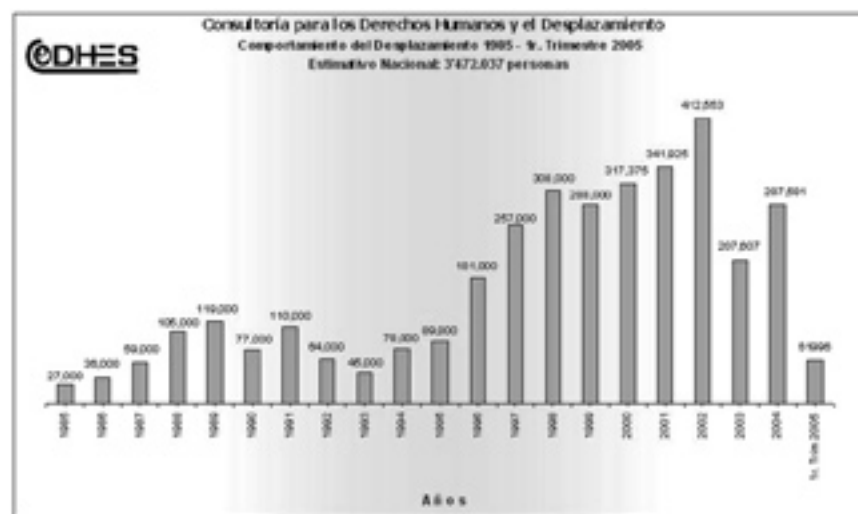


Foto: Archivo, Gobernación del Valle

b) Al pretender identificar los factores domésticos que influyen para la existencia de población desplazada, se hace necesario comenzar reconociendo que la sociedad colombiana ha vivido un prolongado conflicto armado en las cuatro últimas décadas del siglo XX. La degradación de este conflicto ha generado un fenómeno de orden social y demográfico que se expresa en una situación social representada en 3.472.037 colombianos que han debido abandonar su lugar de origen o su residencia. Esta situación social de desplazamiento¹⁷ forzado expresa una crisis humanitaria que se refleja en la violación sistemática de los derechos humanos y libertades básicas de los ciudadanos.

La Gráfica 1 nos describe el comportamiento del fenómeno social del desplazamiento forzado en Colombia entre 1995 y 2005, de acuerdo con los datos estadísticos

ofrecidos por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (COHDES). La tendencia de crecimiento de población obligada a desplazarse de su sitio de origen corrobora la situación de crisis humanitaria producida por la degradación del conflicto armado interno.



Gráfica 1: Comportamiento del desplazamiento 1995 y 2005

¹⁷ El concepto de desplazamiento de población es concebido como una forma específica de migración y hace referencia a toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los Derechos Humanos, infracciones al Derecho Internacional Humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público. Véase, Decreto Número 2569 de 12 de diciembre de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997, Artículo 2, de la condición del desplazado.

Esta situación de desplazamiento masivo¹⁸ genera consecuencias políticas y socio-económicas que demandan una acción de atención integral por parte del Estado colombiano; pues la población desplazada sufre problemas como: 1) La vulneración de sus derechos fundamentales. 2) El no reconocimiento de las comunidades receptoras del desplazado como víctima y la acción social de otorgarle una valoración que criminaliza su condición de desplazado, hace presuponer que el desplazado constituye una amenaza para las frágiles condiciones de seguridad, de servicios de salud y educación en regiones donde se aloja la población afectada. 3) La posesión de un bajo capital cultural y político que les impide acceder a los procedimientos legales para exigir de las autoridades competentes la vigencia del orden justo y equitativo que debe garantizar el Estado a todos los colombianos.

De acuerdo con lo anterior, el desplazamiento tiene como factor esencial la situación de conflicto armado prolongado que afronta la sociedad colombiana. Esta situación se constituye en la condición que genera el fenómeno de movilidad humana impuesto por la violencia armada y se convierte en uno de los hechos políticos que más atenta contra la posibilidad de hacer vigentes los derechos fundamentales expuestos en la Constitución actual. De igual forma, cabe resaltar que el desplazamiento masivo sigue siendo un problema humanitario nacional que demanda del Estado y la sociedad civil una política pública sobre desplazamiento forzado.

c) Los sistemas de atención ofrecidos por el Estado colombiano

para garantizar el derecho a la educación en la población desplazada.

Según las premisas expuestas, el Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la Constitución Política se fundamenta en el respeto de la dignidad humana y en la solidaridad de las personas, y tiene como fin esencial promover y garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

En este marco que determina la tarea del Estado colombiano, se hace necesario comprender que las entidades estatales deben responder con el diseño y la elaboración de programas y proyectos encaminados a prevenir y brindar atención integral a los afectados por el desplazamiento. Asimismo, reconocer que el conjunto de entidades estatales que responden a esta exigencia aparecen integradas en la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República. Esta Red como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Información y Atención Integral debe desarrollar actividades como propiciar la concertación entre las autoridades de nivel nacional, departamental, distrital y municipal para la ejecución de las medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de seguridad que adopte el Gobierno nacional.

Discusión

En el presente trabajo reconstituimos los aspectos formales que orientan el modo como el Estado colombiano debe desarrollar su acción para responder al problema político y social del desplazamiento. Más allá de esta opción, es innegable que existen consecuencias producidas al no garantizarse el derecho a la educación en los desplazados.

18 Se entiende por desplazamiento masivo, el desplazamiento conjunto de diez (10) o más hogares, o de cincuenta (50) o más personas. Se entiende por hogar, el grupo de personas, parientes, o no, que viven bajo un mismo techo, comparten los alimentos y han sido afectadas por el desplazamiento forzado por la violencia. Véase, Decreto Número 2569 de 12 de diciembre de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997, Artículo 12, desplazamientos masivos.

Consecuencias que paradójicamente desdibujan el sentido de Estado formalizado en la Constitución Política y ahondan el acelerado deterioro del tejido social de las comunidades.

Entre las consecuencias socio-políticas más importantes encontramos en primer lugar, leyes aprobadas pero que no están acompañadas de una voluntad política para reconocer y asumir la magnitud del problema. Es común escuchar voces proferidas por los gobernantes locales, indicando que su actividad está centrada en la solución de problemas sociales urgentes de sus comunidades y de las dificultades financieras que deben afrontar. Este hecho genera por un lado, una situación de no visibilización del problema, y por otro lado, crea un ambiente en la opinión pública y en las comunidades de rechazo hacia los desplazados. Lo anterior se refleja cuando las comunidades receptoras perciben al desplazado como una amenaza ante los escasos recursos y derechos con los que cuentan.

En segundo lugar, el hecho social de concebir al desplazado como amenaza no permite comprender que éste ha sido ubicado en un escenario social que presupone capacidades, aptitudes y saberes totalmente diferentes a las constituidas como sujeto histórico con identidad. Es decir, el desplazado no es comprendido como persona

que ha construido una individualidad con capital cultural, y mucho menos se reconoce que ha sido arrancado de los espacios y redes simbólicos que le posibilitaron constituir su identidad personal y colectiva. La pérdida, tanto de su lugar de origen como de la memoria cultural es reducida a una situación relacionada con objetos materiales, desconociendo las redes simbólicas y culturales que constituían el horizonte de mundo que potenció la construcción de una individualidad y modo de organización social.

En tercer lugar, la situación social que hace reducir la condición de humanidad en el desplazado, conduce a institucionalizar una representación social sobre el desplazado que supone un sujeto sin propiedad y podríamos decir sin derechos. Por tanto, son vistos como seres humanos que no hacen parte de una comunidad y por ello su capacidad de relación con *otros* no presupone el mismo trasfondo constitucional.

Finalmente, no puede descartarse que la relación entre ciudadano desplazado y la construcción de proyecto de país esté asumiéndose por fuera de la pretensión liberal de consolidar a través de la cooperación social una sociedad bien ordenada. Es este conjunto de consecuencias las que demandan una atención sistemática al problema del desplazamiento, haciendo énfasis en la educación como alternativa para no

perder de vista al ser humano con identidad, ciudadanía y capacidad moral para participar en la construcción de país. A partir de estas reflexiones se impone la pregunta: ¿Qué tipos de consecuencias genera la no atención de esta problemática, especialmente de cara a la construcción de un proyecto de país y con él de un espacio público con los que nos podamos identificar? ❁

Bibliografía

- Codhes, *Boletín de Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento*. No. 44, Bogotá, 28 de Abril del 2003, p. 12.
- Decreto Número 2569 de 12 de diciembre de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997, Artículo 2, de la condición del desplazado.
- Habermas Jürgen, *La constelación posnacional*, Paidós, Barcelona, 2000, p. 83
- Niebles Osorio, Edgardo. *Constitución Política de Colombia*, Librería Ediciones del Profesional Ltda. Bogotá, 2004, Preámbulo, XXI.
- Pecaut, Daniel, *Los desplazados: un problema social y político*. En: CODHES Informa Número 23 de octubre de 1999.
- Rawls, John, *La justicia como equidad*, Paidós, Barcelona, 2002, pp. 44 y 48
- República de Colombia. Ministerio del Interior y de Justicia. Decreto 250 de febrero de 2005
- República de Colombia. Ministerio de Educación Nacional. Ley General de Educación 115 de 1994.